

UGT, USO, Partit Carlí). Habría que esperar todavía casi un año para que llegaran a unificarse. Entre tanto, sin embargo, funcionaron como auténticos elementos de cohesión, vertebración e impulso de una sociedad civil cada vez más movilizada y dispuesta a la conquista de la democracia. Mientras, las instituciones y personalidades franquistas reproducían en Valencia la errática e inestable trayectoria de sus superiores en la política estatal. Momentos de mayor talante aperturista eran seguidos de abruptos giros hacia la intolerancia y el más duro franquismo. Después de 1969, año en que cesó Rincón de Arellano, Valencia conoció otros dos alcaldes: Vicente López Rosat y Ramón Izquierdo Navarro. Este último habría de presidir el último ayuntamiento franquista y primero de la transición.

LA CIUDAD DEMOCRÁTICA (1976-2008)

[MARC BALDÓ LACOMBA –UVEG–]

Para la ciudad de Valencia y el País Valenciano el periodo que va de 1977 a 1982 comporta un cambio político de envergadura, no sólo porque se restableciera la democracia, anulada cuarenta años atrás, sino además porque, de su mano, vino también la autonomía política en el marco constitucional. Democracia y autonomía han afectado la vida de los ciudadanos y de la ciudad y han abierto posibilidades de aspirar a ser una gran ciudad, dinamizadora de la nutrida y potente red urbana del País Valenciano y competidora de las ciudades de su nivel en Europa. La ciudad de Valencia, por otro lado, está integrada en un área metropolitana que hoy tiene más de millón y medio de habitantes y que alcanza a 57 municipios. El área metropolitana es un espacio urbano caracterizado por una elevada concentración y densidad demográfica, por el predominio de la industria y el sector terciario, por los intensos flujos diarios de personas por motivos de trabajo, estudios u ocio, que cuenta con una red de vías de comunicación y da cabida a diferencias de función: zonas de servicios, núcleos decisorios, industriales, residenciales...

Este espacio empezó a articularse como tal durante el crecimiento e industrialización de los años sesenta. La accesibilidad y mejoras en la comunicación la han extendido más allá de L'Horta. Alborai, Moncada, Manises, Quart de Poblet, Aldaia, Paiporta, Alfafar y Catarroja tienen entre 20.000 y 30.000 habitantes; Burjassot, Alaquàs y Xirivella entre 30.000 y 40.000; Mislata, 43.000, Paterna, 59.000, y Torrent 75.000. La ciudad de Valencia tiene más de 800.000 y en 1970 tenía 650.000

Este capítulo atenderá brevemente la transición en Valencia y la historia de la ciudad desde entonces a nuestros días y se organizará en tres apartados donde se aborda la transición y la protesta vecinal antifranquista, la reforma democrática y la «guerra de las banderas» o la «batalla de Valencia», y los ayuntamientos de la ciudad democrática.

Transición y protesta vecinal

Con cuantos antecedentes procedan, la transición democrática se inició el 20 de diciembre de 1973, cuando ETA asesinó a Carrero Blanco. Faltaban



Con cuantos antecedentes procedan, la transición democrática se inició el 20 de diciembre de 1973, cuando ETA asesinó a Carrero Blanco. Faltaban todavía dos años para que llegase la muerte del dictador y tres y medio para que se celebrasen las primeras elecciones democráticas que tuvieron carácter constituyente. Con la muerte de Carrero, el proceso histórico se aceleró: se derrumbó la imagen que daba la dictadura de invulnerable y se diluyeron las previsiones de dejarlo todo «atado y bien atado» que decía Franco.

todavía dos años para que llegase la muerte del dictador y tres y medio para que se celebrasen las primeras elecciones democráticas que tuvieron carácter constituyente. Con la muerte de Carrero, el proceso histórico se aceleró: se derrumbó la imagen que daba la dictadura de invulnerable y se diluyeron las previsiones de dejarlo todo «atado y bien atado» que decía Franco.

A Carrero le sucedió en la presidencia del gobierno Carlos Arias Navarro, que trajo el «espíritu del 12 de febrero» de 1974, discurso programático en que proponía la «apertura» del régimen y que, además de su limitado alcance, la clase política franquista, cada vez más escindida y enfrentada entre sí, no le permitió desarrollar. La escasa voluntad de reforma se evidenció en las dos ejecuciones de marzo de 1974, y las cinco de septiembre de 1975, de reos condenados por tribunales militares con la falta garantías de siempre y en medio del clamor del mundo civilizado.

Mientras el régimen, alejado de la ciudadanía, se mostraba acartonado y sin rumbo, la oposición se ponía en marcha. Por un lado, las movilizaciones y las huelgas, activadas por la crisis de 1973, se incrementaron. Eran intensas en las fábricas y en las aulas, pero también en los movimientos ciudadanos y en sectores profesionales. Por otro lado, la oposición se organizaba. En Valencia, bajo el impulso de la Asamblea de Catalunya, se constituyó a finales de 1973 la Taula Democrática, que no superó las desavenencias de los grupos clandestinos. Pero en 1974, la revolución de los claveles de Portugal de abril y la primera enfermedad grave del dictador de ese verano, estimularon a la oposición —comunistas, socialistas, valencianistas de izquierda, democristianos y liberales. El Partido Comunista de España (PCE), en efecto, en julio de 1974 creó en París la Junta Democrá-

tica de España que pretendía agrupar bajo su dirección –sin lograrlo– a todas las fuerzas de la oposición y a destacadas personalidades independientes. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que había sido muy poco activo en los años anteriores y en 1972 se había escindido en «históricos» y «renovadores», recobró pulso: su corriente renovadora, en septiembre de 1974, se reorganizó con el apoyo de la Internacional Socialista en el congreso de Suresnes, aunque la federación socialista valenciana, al no definir su posición entre históricos y renovadores, se vio relegada de los principales acontecimientos de la transición. No menos importante fue la recomposición, a finales de 1974, del nacionalismo valenciano con ambición mayoritaria, debida a la unión de diversas organizaciones –entre ellas los Grups d’Acció i Reflexió– que darán lugar al Partit Socialista del País Valencià (PSPV). Por otro lado, en la derecha liberal también surgieron ese año dos formaciones: la Unió Democràtica del País Valencià (UDPV), grupo democristiano y nacionalista que tenía presencia desde los sesenta, mantuvo contactos con Unió Democràtica de Catalunya y a finales de 1974 se organizó como partido, y el Partido Demócrata Liberal del País Valenciano (PDLPV), sin olvidar que durante el verano y otoño de ese año también empezaron las ‘cenas políticas’ y artículos de opinión en *Las Provincias* sobre el futuro político de España y el de los valencianos.

En 1975, la izquierda siguió preparándose. La Junta Democrática extendió sus filiales regionales, entre ellas la Junta Democrática del País Valenciano, creada en agosto e integrada por el PCE, Partido Socialista Popular, Partido del Trabajo de España, OCE (Bandera Roja), PDLPV, el sindicato CC.OO. e independientes como Manuel Broseta que la presidió. El PSOE, en junio de 1975, ya renovado y junto a otros partidos como la UDPV el PSPV y los sindicatos UGT y USO montaron la Plataforma de Convergencia Democrática, alternativa a la Junta, cuya filial valenciana era el Consell de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià aparecido en junio. Ese mismo mes eran detenidos «los 10 de Alaquàs», nacionalistas que fueron acusados por el TOP de reunión ilegal y de pretender –como sucedió– que cuando llegase la democracia hubiese autogobierno de los valencianos. En cualquier caso, y no sin dificultades, la plataforma impulsada por el PCE y la de los socialistas y nacionalistas se fundieron en la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià en 1976, culminando así los esfuerzos unitarios de la oposición valenciana.

Y mientras la oposición se reorganizaba, la clase política franquista se dividía. Los unos eran ‘aperturistas’ –escasamente reformistas–, los otros eran reformistas y pretendían abrir el régimen a formas políticas democráticas controlando el proceso y filtrando a los agentes, y un tercer grupo eran inmovilistas (el *búnker*) y se oponían a todo cambio, fuese aperturista o reformista. En diciembre de 1974 las cortes franquistas aprobaron (no sin pocas resistencias) el Estatuto de Asociaciones Políticas, que permitía legalizar a las «familias políticas» del régimen. A su amparo surgieron, entre otras asociaciones, la Unión del Pueblo Español, que pretendía reformar el régimen manteniendo sus principios; la Unión Democrática Española, que agrupaba a los católicos propagandistas franquistas; el Frente Nacional Español, que reunió a un sector falangista...

Pero reformistas –cada vez hubo más de éstos– que veían zozobrar la dictadura, no legitimaron la limitada apertura del primer gobierno Arias. La derecha franquista, de hecho, no organizó sus formaciones políticas hasta después de la muerte del dictador. En 1977 Alberto Jarabo fundaba en Va-



Y mientras la oposición se reorganizaba, la clase política franquista se dividía. Los unos eran 'aperturistas' –escasamente reformistas–, los otros eran reformistas y pretendían abrir el régimen a formas políticas democráticas controlando el proceso y filtrando a los agentes, y un tercer grupo eran inmovilistas (el *búnker*) y se oponían a todo cambio, fuese aperturista o reformista. En diciembre de 1974 las cortes franquistas aprobaron (no sin pocas resistencias) el Estatuto de Asociaciones Políticas, que permitía legalizar a las «familias políticas» del régimen.

Retirada de la estatua ecuestre de Franco de la plaza del Ayuntamiento, 9 de septiembre de 1983. Levante-EMV.

lencia Alianza Popular (AP), partido neofranquista –el mismo Jarabo se opuso a la Constitución–, y poco antes de las elecciones de junio de ese año se constituyó la Unión de Centro Democrático (UCD) valenciana, la otra gran opción de la derecha, donde se agrupan liberales de Muñoz Peirats, *papos* (Partido Popular Valenciano de Attard) y reformistas del régimen.

Por otro lado, por la izquierda, después de las elecciones y a la vista de los resultados (y las deudas) empezaron las negociaciones que acabaron en la fusión del PSOE, el PSPV y el Partido Socialista Popular (PSP) valencianos en un único partido, el PSPV-PSOE (1978). Los comunistas, también después de las elecciones, y tal vez por el efecto electoral del PSUC, crearon el PCPV. Mientras tanto, también tras las elecciones de junio de 1977, se organizaba la derecha regionalista y nacía Unión Regional Valencianista (URV),

En los últimos años de la dictadura y el inicio de la transición, Valencia fue gobernada por los alcaldes Vicente López Rosat (1969-1973) y Miguel Ramón Izquierdo (1973-1979), continuadores de la política y los planes urbanísticos que definió Adolfo Rincón de Arellano. López Rosat, apenas llegado a la alcaldía inauguró las obras recién terminadas de nuevo cauce del Turia (la desviación del río desde Quart de Poblet a Pinedo) y durante su mandato afrontó múltiples tareas y obras pendientes del Plan de 1966, que por desarrollista estaba dispuesto a calificarlo casi todo de suelo urbano y era permisivo con la especulación. Entre estas herencias estaba el espinoso destino que desde el Plan Sur se reservaba al viejo cauce: se había previsto una autopista que atravesaría la ciudad de oeste a este.

Inicio del nuevo cauce del río Turia a la altura de Quart de Poblet y Mislata.
Foto: J. Piqueras.

que en 1982 dará paso a Unió Valenciana (UV), y el Grup d'Acció Valencianista (GAV), valencianistas extremistas donde se infiltraron gentes de extrema derecha con personas de otros perfiles, incluyendo diputados de UCD.

En los últimos años de la dictadura y el inicio de la transición, Valencia fue gobernada por los alcaldes Vicente López Rosat (1969-1973) y Miguel Ramón Izquierdo (1973-1979), continuadores de la política y los planes urbanísticos que definió Adolfo Rincón de Arellano. López Rosat, apenas llegado a la alcaldía inauguró las obras recién terminadas de nuevo cauce del Turia (la desviación del río desde Quart de Poblet a Pinedo) y durante su mandato afrontó múltiples tareas y obras pendientes del Plan de 1966, que por desarrollista estaba dispuesto a calificarlo casi todo de suelo urbano y era permisivo con la especulación. Entre estas herencias estaba el espinoso destino que desde el Plan Sur se reservaba al viejo cauce: se había previsto una autopista que atravesaría la ciudad de oeste a este. También heredó de Rincón la pretensión de urbanizar la Dehesa del Saler y convertir este espacio en zona de turismo, con golf, parador y altas torres de apartamentos, procediendo a la parcelación y venta de los terrenos públicos de la dehesa. Y como a su antecesor, también le afectó el crecimiento masivo de inmigrantes, las emergencias urbanísticas que ello acarrea y los intereses inmobiliarios que se agazapaban a estos apremios.

Pero no fueron todas las obras. La protesta vecinal y los movimientos ciudadanos obstaculizaron su gestión tecnocrática, metieron gran presión al ayuntamiento y desgastaron al alcalde. Los ciudadanos de los barrios irrumpieron en la calle, creando un clima de creciente libertad. Las movilizaciones estallaron en 1973. El movimiento ciudadano surgió a finales de los sesenta y fue muy activo en los primeros setenta. Las condiciones de vida



de los barrios periféricos de inmigración masiva (Font de Sant Lluís, Benicalap, Rascanya, Torrefiel, Orriols, Sant Marcel·lí...) atizaron el fuego de la protesta. Los nuevos barrios –tanto de la ciudad como en el área metropolitana– se levantaron apremiados por la presión demográfica y el crecimiento industrial; la permisividad con las constructoras desató una feroz especulación y dejó las barriadas con deficientes instalaciones.

Los vecinos, y con ellos la oposición antifranquista que ejercía, a finales de los sesenta, empezaron a reclamar servicios y mejoras, a protestar por mil deficiencias: alcantarillado, luz, transporte público, semáforos, vertederos de escombros situados en los barrios... La oposición al franquismo se gestaba en la experiencia de vida del día a día. A la demanda de equipamientos básicos, añadieron otras más ambiciosas como infraestructuras escolares, sanitarias, denuncias a la carestía de vida o espacios verdes. Como sucedía en todos los movimientos antifranquistas, las reivindicaciones básicas se politizaban y los vecinos demandaron ayuntamientos democráticos. En pocos años se crearon doce asociaciones que, en 1974 formaron una coordinadora –asociaciones y coordinadora, todo ilegal– donde coincidían comunistas, sindicalistas, sacerdotes o universitarios. Y es que el asociacionismo y la protesta de los barrios de trabajadores para tuvo un tono popular, plural e interclasista que, además de hacer visible la oposición, acabó por irradiar conciencia y praxis democrática a otros ámbitos como reuniones de padres, actividades culturales, fiestas populares, asistencia a manifestaciones reclamando el semáforo o la amnistía.

Sin embargo, pese a la importancia de estas protestas de barrio, los emblemas de los anhelos democráticos fueron, por la repercusión social y finalmente mediática –*Las Provincias*–, las movilizaciones populares contra el proyecto de convertir el viejo cauce del río en autopista y urbanizar la dehesa del Saler. Esta última, que empezó a ejecutar el ayuntamiento de López Rosat construyendo y subastando suelo público desde 1970, levantó la campaña de *El Saler per al poble*. El alcalde, que tenía sensación de ser tratado por la opinión pública «como los árbitros», a modo de excusa decía que la urbanización era «un tren en marcha» que no se podía parar (PÉREZ PUCHE, 2001, 48). La otra campaña, la del cauce del río, era menos apremiante: la construcción de la autopista estaba lejos, pero también empezó a reclamarse el río como espacio verde desde 1972, aunque esta campaña no fue ruidosa hasta 1975. Animador de estas protestas fue el militante del Movimiento Comunista del País Valenciano, Just Ramírez, arquitecto y uno de los principales promotores del SEDUV (Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Valencia).

A los movimientos vecinales debe añadirse el de profesionales. Las juntas directivas de los colegios profesionales de arquitectos, abogados, ingenieros agrónomos o doctores y licenciados en filosofía y letras y ciencias fueron ganadas en los años setenta por críticos y antifranquistas que no dudaron en sumarse a los movimientos cívicos contra la dictadura y contribuir así a modelar la oposición. Destacable fue, en el caso de Valencia, la labor de los abogados antifranquistas como Alberto García Esteve o Manuel del Hierro que, con muchos otros, conformaron un nutrido grupo de profesionales que defendió a más de 300 valencianos ante el Tribunal de Orden Público, y las denuncias del colegio de arquitectos de las aberraciones urbanísticas y privatización del Saler.

La llegada al gobierno civil en julio de 1973, con el gobierno Carrero, del alcoyano Enrique Oltra Moltó, conocido por la oposición como *altra*



multa, comportó el cese de López Rosat, a quien consideraba sin la suficiente dureza que requería el momento, y buscó a Miguel Ramón Izquierdo, alcalde entre septiembre de 1973 y abril de 1979 (con un breve intermedio de enero a febrero de 1976 en el que fue alcalde Antonio Soto Bisquert). Ramón, licenciado en derecho, tenía un despacho de abogado y trabajó como asesor jurídico de empresas del metal, fue decano del Colegio de Abogados y presidente de la Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. Era, además, un sindicalista vertical que había ocupado la presidencia del sindicato provincial del metal de la Organización Sindical Española entre 1963 y 1966.

El nuevo alcalde heredó prácticamente el equipo de concejales de López Rosat (aunque tres dimitieron) y su gestión fue continuista y hábil, capeando dificultades financieras y protestas vecinales. Congeló los dos grandes conflictos de la ciudad que quemaron a su antecesor: la urbanización del Saler y el viejo cauce. La urbanización del Saler quedó en cuarentena: paralizó las obras del hipódromo que se había comenzado sin licencia y dejó de subastarse monte municipal, aunque tampoco sin recuperar las parcelas ya vendidas por sus antecesores (SORRIBES, 2007, 45). El cauce quedó en 'fase de estudio'. Si bien cada vez era más evidente para técnicos, concejales y la opinión pública que la autopista no debía atravesar la ciudad por el río y que convenía una zona verde, el alcalde y la mayoría del ayuntamiento se mantuvo indeciso, y lo prueba la visita del rey a la ciudad en diciembre de 1975, en la que firmó un real decreto por el que «cedía» el cauce del Turia al ayuntamiento, «con destino a red viaria urbana y parque público», es decir no estaba claro aún el destino final del cauce. No lo estuvo hasta el ayuntamiento democrático de la izquierda de 1979. Lo que no bloqueó Ramón Izquierdo fue el urbanismo atroz que se había iniciado en la época de Rincón de Arellano: la mentalidad permisiva, la elevación de los precios del suelo, las ilegalidades urbanísticas, las altas densidades de edificación, los déficits de equipamientos, la congestión de tráfico y el deterioro de la ciudad y las condiciones de vida de los ciudadanos.

Coincidiendo con la muerte de Franco se procedió a la renovación de alcaldías aplicando una norma aperturista, según la cual los nuevos alcaldes, en vez de ser nombrados, eran elegidos por los concejales de sus ayuntamientos, y los candidatos podían ser presentados por los concejales o por las asociaciones políticas previstas. Como en Valencia, además de Ramón Izquierdo, se presentaron otros dos candidatos, el alcalde hubo de dimitir por un mes y procederse a una breve campaña pública de exposición de programas y a la elección. Uno de estos candidatos fue Serafín Ríos Mingarro, abogado del Estado, propagandista, fundador del CEU San Pablo y vinculado a la democracia cristiana, cuya campaña fue apoyada –y desbordada– por la junta democrática y las asociaciones de vecinos. Aunque los concejales, como era de esperar, votaron a Ramón (Ríos obtuvo tres votos), la campaña sirvió para hacer visibles las opiniones de la oposición y reclamar el río como espacio verde.

Las alcaldías, renovadas de este modo tan «orgánico» en 1976, se prolongaron hasta 1979. Los gobiernos que rigieron la transición prefirieron que se realizara antes la reforma política, se aprobase y refrendase la Constitución, se eligiese nuevo parlamento en marzo de 1979 y, finalmente, en abril de ese año, se efectuase la renovación en los ayuntamientos. La experiencia de las elecciones municipales de abril de 1931, que condujeron al veloz

Pese a la importancia de estas protestas de barrio, los emblemas de los anhelos democráticos fueron, por la repercusión social y finalmente mediática –*Las Provincias*–, las movilizaciones populares contra el proyecto de convertir el viejo cauce del río en autopista y urbanizar la dehesa del Saler. Esta última, que empezó a ejecutar el ayuntamiento de López Rosat construyendo y subastando suelo público desde 1970, levantó la campaña de *El Saler per al poble*. El alcalde, que tenía sensación de ser tratado por la opinión pública «como los árbitros», a modo de excusa decía que la urbanización era «un tren en marcha» que no se podía parar

La Dehesa del Saler, años 60-70.
Foto: José María y José Vicente Penalba.

hundimiento de la monarquía y súbita proclamación de la república, era la clave de tanta dilación. Y, ciertamente, los resultados de las primeras elecciones locales en ciudades y núcleos industriales justificaron las dilaciones de los políticos de la UCD. Ramón Izquierdo, hábil y perspicaz, presentó la dimisión tras el resultado electoral de junio de 1977, pero no le fue aceptada, se tomó unas vacaciones y volvió a la alcaldía con la legitimidad de que el gobierno le pidiese que continuara.

En este último tramo de su mandato, más allá de la gestión urbana y el desempeño de sus tareas de procurador (se ausentó del hemicycle cuando llegó la hora de votar la Ley de Asociaciones Políticas en junio de 1976), empezó a jugar otras cartas políticas: destacó muy pronto como uno de los principales promotores del regionalismo populista conocido como *blaverismo*: fue una de sus principales figuras y fundó URV, formación que surgió como hemos dicho tras las legislativas de 1977.

La reforma democrática y la «batalla de Valencia»

El primer semestre de 1976, fue un tiempo clave como acelerador del cambio político. El rey, tras la muerte del dictador, nombró a Arias presidente del gobierno y éste preparó otro equipo con ministros que tenían una estrategia de reforma más airosa. La presencia de Fraga o Areilza apuntaba en este sentido; el primero, a la sazón, tenía en cartera un paquete de reformas preparadas para ir transformando la dictadura y, a la vez, controlar el ritmo de la democratización. Pero en el gobierno también había ministros de otras tendencias lo que, unido a la escasa voluntad reformista de Arias, anuló las posibilidades. En todo caso, las reformas previstas (sus contenidos, ritmo, legalización o no de partidos...) partían del gobierno, sin que éste contase con la oposición.

Para imponer una rectificación a esta política que eternizaba el post-franquismo, la izquierda activó la estrategia de la movilización-negociación. A las huelgas obreras, de estudiantes y de vecinos se añadieron desde enero de 1976 las que eran directamente políticas. El primer semestre de 1976 fue de gran movilización social. En Valencia destaca la manifestación abortada por la policía de 16 de enero que pedía *llibertat, amnistia i estatut d'autonomia* y la del 12 de julio, que ya con un nuevo gobierno, transcurrió pacíficamente y entregó en la audiencia 40.000 firmas demandando amnistía.

De no haber una fuerte contestación social (probablemente fue el semestre de más intensa movilización desde los años sesenta), el gobierno no se hubiese diluido tan pronto. Pero la protesta –con víctimas por la acción policial– lo desgastó y forzó al rey a buscar en julio de 1976 un nuevo presidente con un nuevo equipo más coherente que, en vez de imponer la reforma (como pensaban los ministros reformistas del anterior), apostó por pactarla o negociarla con la oposición, dada la situación de *impasse*. Ésta fue una radical diferencia entre el primer gobierno de la monarquía (y segundo de Arias) y el segundo gobierno de la monarquía y primero de Adolfo Suárez.

Suárez tenía esbozada una estrategia abierta de proceso de reforma que su mentor, Torcuato Fernández-Miranda, había preparado y que se puede resumir en frase del último: «de la legalidad a la legalidad, pasando por la legalidad». Es decir: pasar de la legalidad franquista a la legalidad democrática y hacer el delicado tránsito legalmente, desde el gobierno de

Para imponer una rectificación a esta política que eternizaba el post-franquismo, la izquierda activó la estrategia de la movilización-negociación. A las huelgas obreras, de estudiantes y de vecinos se añadieron desde enero de 1976 las que eran directamente políticas. El primer semestre de 1976 fue de gran movilización social. En Valencia destaca la manifestación abortada por la policía de 16 de enero que pedía *llibertat, amnistia i estatut d'autonomia* y la del 12 de julio, que ya con un nuevo gobierno, transcurrió pacíficamente y entregó en la audiencia 40.000 firmas demandando amnistía.

Manifestación pro-estatut, 9 de octubre de 1977. *Historia del Pueblo Valenciano*.

la nueva monarquía (no desde ningún gobierno provisional), y pasando por la autodisolución de las cortes franquistas y la elección democrática de un nuevo parlamento. Todo ello comportaba un pacto implícito, debido tanto a la impotencia de la oposición para imponer su estrategia de ruptura (con gobierno provisional, comisiones gestoras en ayuntamientos, elecciones constituyentes, referéndum sobre la forma de Estado, etc.), como la de los reformistas para imponer su reforma sin negociarla. Este acuerdo, en el que con gran frecuencia saltaban chispas, acabó por anar estrategias y propósitos de reformistas y la oposición mayoritaria. Y todo ello se hizo en un plazo rápido, una de las claves del éxito de la reforma de Suárez.

Sea como fuere, entre otras muchas novedades, el presidente presentó una ley para la reforma política a las cortes franquistas que, de hecho, era una ley de cortes que sustituía las franquistas por un parlamento bicameral elegido por los ciudadanos por sufragio universal –excepto un número de senadores que designaba el rey– entre las candidaturas que preparaban los partidos políticos previamente legalizados o las asociaciones electorales, y ya el nuevo parlamento entendería del orden político del país, salvando la monarquía. El ritmo rápido de la reforma consistió en tramitar con rapidez esa ley y, una vez aprobada por los procuradores, someterla a





referéndum el 15 de diciembre de 1976 y celebrar las elecciones –previa legalización de partidos– el 15 de junio de 1977. Antes de cumplirse un año de ser nombrado Suárez, el primer paso de la transición se había completado. El nuevo parlamento fue el que elaboró la Constitución de 1978 y, junto con el gobierno, mientras se hacía ésta y se aprobaban otras importantes leyes, se fue diseñando el mapa autonómico y se crearon gobiernos preautonómicos.

El Estado de las autonomías previsto en la Constitución de 1978 respondió a dos importantes objetivos: satisfacer los nacionalismos cuajados y con raíces que fueron llamados históricos, y rectificar la concepción centralista del Estado liberal que, con la excepción republicana, era la vigente desde 1812. Se abordaba así la vieja necesidad de articular España de otro modo a como la experiencia liberal conocía, dando así respuesta a cuestiones territoriales complejas, variadas y asimétricas. En los últimos años del franquismo y con intensidad desde las elecciones de junio de 1977, a las demandas de autonomías históricas –catalana, vasca, gallega– se añadieron otras: Valencia (desde los años sesenta), Andalucía, Canarias...

En la cimentación de la nueva concepción del Estado fueron muy influyentes los partidos nacionalistas subestatales, cuyas propuestas, de notable poder movilizador, lograron calar lentamente –aunque no sin cautelas– en los partidos de izquierda de ámbito estatal. Pero comunistas y socialistas, al margen de esta influencia, también conocieron una evolución hacia posiciones federalistas o autonomistas, rectificando así la estructura del Estado para poder integrar en ella la pluralidad de las nacionalidades y regiones como entonces se decía. La derecha, en cambio, tardó más en digerir una nueva organización del Estado, pero al final prefirió la regionalización del país con diferencias entre sus territorios que consolidar sólo las nacionalidades históricas. Era el «café para todos».

En el País Valenciano, tras las elecciones generales de junio, en agosto de 1977 se constituyó el Plenari de Parlamentaris que empezó a tratar la autonomía. De hecho, convocó manifestación para solicitar estatuto para el 9 de octubre siguiente y –para sorpresa de todos, pero especialmente de los partidos de la derecha– medio millón de personas llenaron la ciudad. La demanda autonomista no era sólo cuestión de políticos sino, como se ve, también de los ciudadanos. En esa manifestación todavía convivieron y se respetaron balsámicamente señeras *sin* y *con* franja azul. La «guerra de las banderas» aún no había estallado.

En marzo de 1978 se creaba la Preautonomía del País Valenciano [sic] y el socialista Josep Lluís Albiñana era elegido presidente del Consell de dicha entidad. Su tarea fue, a partir de enero de 1979, al mes de aprobarse la constitución, iniciar el proceso autonómico por el artículo 151, de vía rápida y con mayores competencias, apostando por el procedimiento pensado para las nacionalidades históricas. A tal efecto, el 95% de los valencianos a través de sus municipios, como estaba previsto, solicitaron la autonomía.

En la cimentación de la nueva concepción del Estado fueron muy influyentes los partidos nacionalistas subestatales, cuyas propuestas, de notable poder movilizador, lograron calar lentamente –aunque no sin cautelas– en los partidos de izquierda de ámbito estatal. Pero comunistas y socialistas, al margen de esta influencia, también conocieron una evolución hacia posiciones federalistas o autonomistas, rectificando así la estructura del Estado para poder integrar en ella la pluralidad de las nacionalidades y regiones como entonces se decía.

Pegatina con una pintada del Partido Socialista Valenciano, c. 1960-1970. Arxiu Fuster.

Pero fue pocos meses después –diciembre de 1978 y primeros meses de 1979– cuando estalló el conflicto. Si buscamos una fecha simbólica de la «guerra de las banderas» o la «batalla de Valencia», como se conoce al fenómeno, la mejor tal vez sea el 9 de octubre de 1979, momento en que en el balcón del Ayuntamiento de Valencia fue quemada la *quatribarrada* con escudo y sin franja que había aprobado el Consell preautonómico unos meses antes. Si buscamos una fecha más real, más política, su detonador fueron las elecciones generales de marzo de ese año que ganó en el País Valenciano la izquierda, y las municipales de abril que dieron la victoria a la izquierda en las grandes ciudades valencianas y en la capital. Con cuantos antecedentes procedan, el origen de la «batalla de Valencia» está ahí.

Las tensiones soterradas sobre los símbolos identitarios, quedaron al descubierto en 1979. En diciembre dimitió Albiñana y fue elegido el ucedista Enrique Monsonís como presidente del Consell. Su tarea fue reconducir el proceso autonómico de la vía del 151 a la del 143, pensada para las regiones, de vía lenta y con –inicialmente– menos competencias. Mientras tanto, empezaron a prodigarse manifestaciones y broncas de los *blaveros*, apareciendo, singularmente en la ciudad de Valencia, fuertes tensiones emocionales que en determinados momentos polarizaron a sus ciudadanos.

El *blaverismo* retomó una vieja estrategia –ya practicada en 1963– consistente en activar un populismo anticatalanista. Halló una rápida colaboración en la derecha, si pudiese decirse que no fue ésta (Ramón Izquierdo, Emilio Attard, Abril Martorell, Manuel Broseta –que en pocos años pasa de posiciones federalistas a posiciones regionalistas–, María Consuelo Reina...) la que lo fomentó y construyó. Si en los primeros momentos de la transición el populismo anticatalanista, muy minoritario, se sirvió del franquismo agazapado en el ayuntamiento y la diputación de Valencia (con Ignacio Carrau), desde las primeras elecciones democráticas de 1977 y, sobre todo, desde las generales y municipales de 1979, vio aumentar sus filas. ¿Por qué?

Una explicación posible es que, cuando Albiñana inicia el proceso autonómico, los valencianos se debatían en dos identidades: una, nacida en los años sesenta, unida a la lucha antifranquista y potenciada por Joan Fuster, era la nacionalista periférica y se proponía «fer sorgir de les velles arrels una cultura contemporània» (CUCÓ, 2002, 30); la otra identidad, tradicional y

Lo peor de la «batalla de Valencia» fue la violencia. Los «Aimadors de les glories valencianes» durante unos cuantos años se fundieron y mezclaron –en sus manifestaciones y en sus bombas a intelectuales– con la extrema derecha, con Fuerza Nueva. En el 9 de octubre de 1980, premonitoriamente (el 23 F fue unos meses después), mientras se defendía la *senyera* con franja azul y la denominación de *regne*, se lanzaban huevos y objetos a las autoridades y se gritaba «Ejército al poder». Esta irritación populista y desestabilizadora hallaba apoyo mediático especialmente –para vergüenza del diario– en *Las Provincias*.

Pintadas en la vivienda de Manuel Sanchis Guarnier, 1978. Arxiu Manuel Sanchis Guarnier.



conservadora, no era nacionalista sino regionalista (vivía cómoda como región española), se nutría de tradiciones folklóricas y además la identidad propuesta por los nacionalistas resultaba a muchos ciudadanos ajena, cuando no contraria a sus representaciones. El regionalismo, hinchado por el anticatalanismo populista, rebuscaba en tradiciones y sentimientos localistas, en los tópicos valencianos, en el secesionismo lingüístico, en la vulgarización del idioma, en el casticismo cultural, en la sacralización de la *senyera* con franja azul y hasta en una especie de sentimiento de inferioridad y victimismo de esta ciudad frente a Barcelona. «Xoc entre “discursos” i narratives de la identitat valenciana», dice Archilés (2006, 508). No cabe duda que la toma de conciencia de la identidad de los valencianos era «desigual»: los unos apuntaban a mantenerse como región de España, los otros se abrían a otras posibilidades.

En un primer momento, el regionalismo, adoptando la forma de anticatalanismo populista, fue apoyado por los franquistas recalcitrantes que quedaban en la administración local (los Ramón Izquierdo, Carrau...) y por la tardofranquista Alianza Popular. Pero entre 1977 y 1979 empezó a apoyarlo también la UCD y amplios sectores de la derecha social valenciana. No cabe duda que también sirvió –y sigue sirviendo a veces– para rivalizar la izquierda y la derecha en las elecciones, y para que la segunda estigmatice de enemiga de Valencia a la primera: «un voto al PSOE es un voto al catalanismo» se pintaba en los carteles electorales de esta formación en las campañas de 1979 (CUCÓ, 2002, 76). Lo peor de la «batalla de Valencia» fue la violencia. Los «Aimadors de les glories valencianes» durante unos cuantos años se fundieron y mezclaron –en sus manifestaciones y en sus bombas a intelectuales– con la extrema derecha, con Fuerza Nueva. En el 9 de octubre de 1980, premonitoriamente (el 23 F fue unos meses después), mientras se defendía la *senyera* con franja azul y la denominación de *regne*, se lanzaban huevos y objetos a las autoridades y se gritaba «Ejército al poder» (BLANCH, 2004, 50). Esta irritación populista y desestabilizadora hallaba apoyo mediático especialmente –para vergüenza del diario– en *Las Provincias*.

Finalmente, en julio de 1982 culminaba el proceso autonómico valenciano al aprobar el parlamento, con los votos de UCD, PSOE y PCE, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Un año después, en mayo de 1983, las primeras elecciones autonómicas (junto con las segundas municipales) constituyeron las primeras Corts Valencianes en las que el grupo mayoritario, entonces, era el socialista. La siembra de tensiones *blaveras* no sirvió, al menos de momento, para cambiar las intenciones de un electorado que antepuso «el cambio» a todo lo demás. Para el País Valenciano, bautizado como Comunidad Valenciana (ni *país* ni *regne* ni tampoco *región*: el consenso buscó lo más anodino), el proceso de transición, con las llagas aún abiertas, había concluido.

La ciudad democrática

Dos son las etapas que ciñen la historia de la Valencia democrática. La primera se inicia en 1979 al celebrarse las primeras elecciones democráticas que, merced al pacto entre socialistas y comunistas, ganó la izquierda. Hasta 1991 se sucedieron los alcaldes Fernando Martínez Castellano, Ricard Pérez Casado y la alcaldesa Clementina Ródenas Villena. En 1991 se inicia la segunda etapa, al ganar la alcaldía la derecha, mediante un pacto



entre el Partido Popular y Unión Valenciana; constituye una era de gobierno, aún no cerrada, que hasta el momento acumula dieciocho años y en la que la ciudad está regida por la alcaldesa Rita Barberá Nolla. El siguiente cuadro resume el número de concejales por partidos en la historia democrática reciente.

| Partido | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| AP/PP | – | *13 | 7 | 9 | 17 | 20 | 19 | 21 |
| UCD | 13 | – | – | – | – | – | – | – |
| URV/UV | 1 | * | 7 | 8 | 3 | – | – | – |
| CDS | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
| PSPV-PSOE | 13 | 18 | 13 | 13 | 8 | 11 | 12 | 12 |
| PCPV/IU | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | – |
| Total | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |

* En 1983 se presentó la coalición (Alianza Popular-Unión Valenciana) AP-UV

Fuente: Ministerio del Interior

En conjunto, el periodo 1979-1991 se caracterizó por romper con el pasado ideológico y urbanístico de la ciudad. El ayuntamiento apostó por la participación ciudadana y una cultura moderna, se comprometió con la disminución de los desequilibrios de la ciudad y los ciudadanos mediante una estrategia de dotación de equipamientos públicos –de los que tan necesitada se hallaba la urbe– y, como cabía esperar, desarrolló una línea ideológica socialista y una política cultural de dignificación valenciana que superaba el umbral folclórico al que se había ceñido el último alcalde franquista. Pero, tal vez, la principal aportación de los mandatos socialistas, y de Pérez Casado en concreto, fue replantearse la ciudad sentando las bases de un nuevo plan de desarrollo urbano que, por fin, dejaba atrás el de 1966: el Plan General de Ordenación Urbana de 1988.

Los años socialistas fueron duros: tropezaron con la «batalla de Valencia», muy aguda en el municipio por cuanto el sentimiento identitario regionalista

Alfons Cucó, Ricard Pérez Casado, Felipe González y otros en la plaza del Ayuntamiento, 1980. Foto: José María y José Vicente Penalba.

era particularmente intenso en la capital, lo que fue usado por la estrategia de desgaste de la derecha al entender que muchos votantes podían ser proclives a cambiar el voto si se activaban las campañas mediáticas «anticatalanistas», las manifestaciones y otras acciones de erosión e insultos que tuvieron en el punto de mira de modo permanente al alcalde Pérez Casado. La extrema derecha, mezclada en Valencia con los *blaveros* radicales, desestabilizó constantemente, y el 23 F tuvo en la ciudad una de sus principales escenas. El periodo de la consolidación democrática, por otro lado, también fue difícil para los ayuntamientos porque el gobierno y el parlamento dieron prioridad al desarrollo legislativo y presupuestario de las autonomías, relegando a los municipios a un segundo plano. La coyuntura económica, en fin, tampoco era la más dichosa: la crisis de 1973 repuntó en 1979, y los años siguientes conocieron las grandes reconversiones. No faltaron las desavenencias internas de los socialistas valencianos que, por de pronto, hicieron dimitir al primer alcalde democrático de la nueva era a los pocos meses de ser elegido y, unos cuantos años después, obligaban al segundo alcalde a presentar la dimisión.

El primer alcalde fue Martínez Castellano, militante socialista que trabajaba como analista de sistemas en Marcol, empresa de su tío. Encabezó la lista municipal del ayuntamiento de Valencia contra la opinión de Lerma, que llegó a ofrecerle a cambio la presidencia de la diputación si la ganaban, pero no lo aceptó. Apenas fue alcalde cinco meses: de abril a septiembre. Las convulsiones del socialismo lo sustituyeron. Como militante socialista se alineó con los partidarios del marxismo en el XXVIII congreso del PSOE (aquél en el que Felipe González dejó el cargo de secretario general para volver, aclamado, en septiembre y con su vuelta forzar el abandono de las tesis marxistas). Esta actitud, a la que se añadía la excelente relación que mantenía con Pedro Zamora, teniente de alcalde del partido comunista, debió influir en su expulsión del partido, decisión tomada por la comisión gestora federal. Se le dio de baja de concejal con el pretexto de un desfase de 25 pesetas hallado en las cuentas de su gestión como tesorero del partido en la campaña electoral, pero en el fondo el episodio era un aviso a navegantes: las alianzas con los comunitas serían controladas (PÉREZ PUCHE, 2001, 164). Así pues, Martínez Castellano sólo pudo dejar trazado en el aire su planteamiento, y no se puede decir mucho más que sus propósitos de hacer posible la democracia en la ciudad, de construirla con los ciudadanos, de profundizar en ella abriendo la gestión a la participación popular..., aspectos que recogieron los dos alcaldes socialistas que le siguieron.

Ricard Pérez Casado, concejal de urbanismo de este primer ayuntamiento, era un hombre de izquierda, miembro de Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, donde en los años sesenta estudiaba económicas, licenciándose después en ciencias políticas en la Complutense y estudiando humanidades en Aix-en-Provence. Políticamente se vinculó al PCE y, desde 1976, militó en el PSPV-PSOE, donde ha desempeñado diversos cargos orgánicos. Intelectualmente brillante y bien preparado, especializado en geografía urbana con una perspectiva humanista (se doctoró por la Universitat de València años después), era, probablemente, el mejor alcalde que podía encontrar la ciudad para darle la vuelta a la deriva que le impuso el urbanismo franquista. En no poca medida, gracias al tesón del «soñador» Pérez Casado –según le tildaba la prensa y no como piropo–, gracias a su pasión por pensar y repensar la ciudad, pudo contribuir mucho a cambiar su rumbo y su faz, a superar la urbe agobiante del cemento desarrollista y la falta de dotaciones.



Los años socialistas fueron duros: tropezaron con la «batalla de Valencia», muy aguda en el municipio por cuanto el sentimiento identitario regionalista era particularmente intenso en la capital, lo que fue usado por la estrategia de desgaste de la derecha al entender que muchos votantes podían ser proclives a cambiar el voto si se activaban las campañas mediáticas «anticatalanistas», las manifestaciones y otras acciones de erosión e insultos que tuvieron en el punto de mira de modo permanente al alcalde Pérez Casado. La extrema derecha, mezclada en Valencia con los *blaveros* radicales, desestabilizó constantemente, y el 23 F tuvo en la ciudad una de sus principales escenas. El periodo de la consolidación democrática, por otro lado, también fue difícil para los ayuntamientos porque el gobierno y el parlamento dieron prioridad al desarrollo legislativo y presupuestario de las autonomías, relegando a los municipios a un segundo plano. La coyuntura económica, en fin, tampoco era la más dichosa: la crisis de 1973 repuntó en 1979, y los años siguientes conocieron las grandes reconversiones.

Gobierno Militar, la noche del 23 F en Valencia. Foto: José María y José Vicente Penalba.

En el mandato 1979-1983, en que el ayuntamiento fue gobernado por la coalición PSPV-PSOE y PCPV, se puso en marcha el tratamiento de choque urbanístico de actuaciones urgentes que permitían las limitadas finanzas en cuatro grandes frentes: la remodelación urbana de barrios periféricos, que acumulaban las deficiencias arriba señaladas; frenar la degradación del centro histórico, protegiendo edificios y rehabilitando algunos; la recuperación del Saler, con un plan especial para proteger su ecosistema y recuperar las parcelas vendidas, y finalmente el plan especial del viejo cauce del Turia que con el tiempo sería uno de los aspectos que más cambiarán la faz de la ciudad y la vida de sus ciudadanos.

En el mandato 1983-1987 los socialistas se alzaron con la mayoría absoluta (a expensas de los votos comunistas), lo que les llevó a prescindir del PCPV y a desarrollar los principales proyectos de su etapa. En 1983 se delimitaba el suelo urbano, cambiándose la clasificación de muchas áreas que en el plan de 1966 eran suelo urbano y, seguidamente, empezó a prepararse el plan general de ordenación urbana, presentándose un avance en 1985. Se iba configurando un nuevo modelo de ciudad con la célebre «T» que integraban el cauce del Turia, iniciándose la ejecución, y la fachada marítima, que empezó a ejecutarse después. La oposición de Martín Quirós, de AP, era directamente confrontación y acusaba al alcalde de «faraonismo»; la de González Lizondo, de UV, iba a lo suyo: si se dice *col·legi* o *colege*... El período 1987-1991 ya fue más difícil. Por de pronto, aunque los socialistas gobernaron y Esquerra Unida (EU) mantuvo los votos que en 1983 tenía el PCPV, el PP y UV sumaban más ediles que los socialistas; la novedad fue la presencia del partido bisagra Centro Democrático y Social (CDS), cuyo cabeza de lista era el abogado laboralista Manuel del Hierro, que procedía de las filas socialistas (llegó a disputarle a Lerma la secretaría general, perdiéndola por escaso margen) y se salió del partido para ingresar en CDS, grupo que abandonó el año siguiente y pasó al grupo mixto. A esta complejidad han de añadirse las tensiones internas del grupo municipal socialista, las diferencias entre el ayuntamiento y la Generalitat —o tal vez mejor, entre Pérez Casado y Lerma— que se concretaban en escasa la colaboración financiera de la autonomía, y las reivindicaciones de las asociaciones de vecinos,

En el mandato 1979-1983, en que el ayuntamiento fue gobernado por la coalición PSPV-PSOE y PCPV, se puso en marcha el tratamiento de choque urbanístico de actuaciones urgentes que permitían las limitadas finanzas en cuatro grandes frentes: la remodelación urbana de barrios periféricos, que acumulaban las deficiencias arriba señaladas; frenar la degradación del centro histórico, protegiendo edificios y rehabilitando algunos; la recuperación del Saler, con un plan especial para proteger su ecosistema y recuperar las parcelas vendidas, y finalmente el plan especial del viejo cauce del Turia que con el tiempo sería uno de los aspectos que más cambiarán la faz de la ciudad y la vida de sus ciudadanos.

Devesa del Saler. Foto: F. Bustamante. Levante-EMV.

más activas que nunca. Pérez Casado pudo gobernar negociando y pactando con unos y otros, y pudo conseguir que el consistorio aprobara el Plan General de Ordenación Urbana de 1988, donde se diseña la ciudad que se ha desarrollado después, tanto en el breve mandato de la alcaldesa socialista Ródenas (1989-1991) como en la larga era de la conservadora Barberá (desde 1991). Pero el alcalde acusó el desgaste. Sólo faltaba la intromisión autonómica en las competencias municipales, obligando a modificar algunos aspectos del Plan (el solar de los jesuitas y algún otro), para que presentara la dimisión al acabar el mes de diciembre de 1988. Con Pérez Casado dimitió el concejal de urbanismo Fernando Puente.

Clementina Ródenas Villena, desde 1987 concejala de hacienda y teniente de alcalde, pasó a ser la nueva alcaldesa. Era la primera mujer que ocupaba este cargo en la ciudad. Profesora de historia económica de la Universitat de València, había pertenecido al PSPV en la transición. En su mandato volvió la tranquilidad al grupo municipal socialista y su eficacia se vio acompañada –ahora sí– por los convenios con que se volcó la Generalitat tras la sequía financiera de los años anteriores. Así pudieron realizarse proyectos estancados y diseñarse otros nuevos como el complejo de la Ciutat de les Arts i les Ciències, más tarde ampliado por el PP. Con todo, las obras de los años de Ródenas no pudieron frenar el desgaste de los socialistas –por la difícil legislatura y los conflictos internos– y perdieron la alcaldía en las municipales de 1991. Ródenas no pudo repetir y pasó a la oposición y a ser (por conservar la mayoría socialista en la provincia todavía cuatro años más) presidenta de la Diputació de València, siendo también la primera mujer que ocupaba este cargo.

Tras los doce años de gobierno socialista, en 1991 se alzó con el gobierno de la ciudad Rita Barberá Nolla, del PP, que tras un primer mandato con





Unión Valenciana, consolidó su puesto de alcaldesa con cuatro mayorías absolutas consecutivas (de momento): 1995, 1999, 2003 y 2007. Descendiente de uno de los protagonistas de la revolución industrial en Valencia, Miguel Nolla, e hija de periodista, la actual alcaldesa se licenció en ciencias económicas en Valencia y periodismo en la Complutense y ha trabajado como periodista en la radio y en la prensa y como funcionaria en Gobierno Civil. Fundadora y afiliada al partido Alianza Popular, pupila de Fraga, ha desempeñado diversos cargos orgánicos y ha sido diputada en las Corts Valencianes desde 1987.

En su primer mandato –1991-1995– gobernó con UV, que sacó ocho concejales, (uno menos que el PP), resultado de la siembra que en los años anteriores hizo toda la derecha valenciana en la recurrente «guerra de las banderas». El mobiliario urbano y las aceras, junto con la regresión cultural y la vuelta al regionalismo y al folclore, fueron la gran aportación de este primer consistorio conservador.

Sin embargo, el segundo mandato de Barberá y desde entonces los que han seguido, han sido distintos. No sólo porque la Generalitat haya pasado del PSPV-PSOE al PP en 1995 (las relaciones entre Barberá y Zaplana han sido tensas), sino porque, desde 1966, con la expansión económica, se inicia un *boom* inmobiliario que durará hasta la crisis de 2008 y que cambiará por completo la ciudad.

Esta inusitada expansión urbana se debe, además de a la coyuntura económica, a la aplicación ‘benévola’ (o irresponsable) de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, aprobada por la última Generalitat socialista en 1993, a la demanda de inversión (debida, entre otras causas, al blanqueo de dinero provocado por la entrada del euro), y a la bajada de los tipos de interés. Todo ello ha provocado, aprovechando la coincidencia de objetivos entre el ayuntamiento y los promotores urbanísticos, desarrollar más de un centenar de Programas de Actuación Integrada (PAIs), lo que ha supuesto un giro espectacular y mejoras manifiestas en la urbanización de la ciudad.

Además, se ha dotado de equipamientos de ‘capitalidad’ (iniciados ya por Pérez Casado con el Palau de la Música), entre los que cabe destacar el complejo cultural y de ocio de la embocadura del río, que se ha convertido en icono identificador de la «Nueva Valencia», y que, sin desmerecer la atención y recursos aportados en la época del PP, ya había sido proyectado y empezado antes –el Gulliver–, aunque haya sido ampliado por Barberá: Hemisfèric, Ciutat de les Ciències, de les Arts, Parc Oceanogràfic, Àgora... Otro emblema de ‘capitalidad’ es el Palau de Congressos. Y a estos edificios que definen la era Barberá, deben añadirse los eventos: Copa del América, Fórmula 1...

Entrenamientos de los equipos de Fórmula 1 en Valencia.
Foto: Antonio J. Ballester Sanz.



Además, se ha dotado de equipamientos de ‘capitalidad’ (iniciados ya por Pérez Casado con el Palau de la Música), entre los que cabe destacar el complejo cultural y de ocio de la embocadura del río, que se ha convertido en icono identificador de la «Nueva Valencia», y que, sin desmerecer la atención y recursos aportados en la época del PP, ya había sido proyectado y empezado antes –el Gulliver–, aunque haya sido ampliado por Barberá: Hemisfèric, Ciutat de les Ciències, de les Arts, Parc Oceanogràfic, Àgora... Otro emblema de ‘capitalidad’ es el Palau de Congressos. Y a estos edificios que definen la era Barberá, deben añadirse los eventos: Copa del América, Fórmula 1...

La «Nueva Valencia», como con orgullo la llama el gobierno municipal, sin embargo, no debe ocultarnos la persistencia de espacios degradados, la falta de dotaciones y servicios tanto en los barrios periféricos (Cabanyal, Natzaret...) como en los céntricos (Carme, Russafa...), la privatización de

La ‘Valencia de escaparate’ no debe hacer olvidar la difícil integración y degradado hábitat donde se hacina –si no duermen bajo los puentes– una creciente inmigración extracomunitaria y de Europa oriental desde los años 90, en la que no han faltado, en buena medida por las deficiencias municipales, los conflictos raciales (Russafa).

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá Nolla, en el balcón del ayuntamiento acompañada por dos falleras mayores. Barrio de Ruzafa.



servicios públicos (las *escoles* municipales de enseñanza infantil fueron suprimidas por el PP), los recortes de suelo para servicios, la escasa intensidad de invertir en parques de barrio, la elevación de alturas. Tampoco la ‘Valencia de escaparate’ debe hacer olvidar la difícil integración y degradado hábitat donde se hacina –si no duermen bajo los puentes– una creciente inmigración extracomunitaria y de Europa oriental desde los años 90, en la que no han faltado, en buena medida por las deficiencias municipales, los conflictos raciales (Russafa).

El PP, desde 1991 en el ayuntamiento y desde del 1995 en la Generalitat hasta ahora ha aportado dos novedades respecto al programa socialdemócrata anterior. La primera ha sido sustituir el crecimiento equilibrado que perseguían los socialistas tanto en la economía valenciana como en la ciudad (barrios-centro, equipamientos-edificios de ‘capitalidad’), por un modelo de crecimiento económico desequilibrado en economía (se da prioridad al turismo y la construcción), y también en la política urbana. En la nueva estrategia del PP, los constructores, la ‘Valencia escaparate’, los eventos... han ido por delante de las necesidades de los vecinos. Pero no hay que extrañarse: esa es la opción de la derecha, y es votada masivamente, porque el modelo construcción-turismo-eventos, da trabajo (y beneficios) y crea oportunidades.

La segunda novedad, que contribuye lo suyo a la hegemonía de la derecha, es que el PP –y con gran brillantez el PP local y la alcaldesa– ha desarrollado una cultura política regionalista, populista, folclórica, con un discurso grandilocuente (*Vàlencia lidera...*) que, unido a operaciones de imagen (Tercer Mil·lenni, Pla Estratègic...), le permiten mantener sin disputa el poder. A ello se añade el carácter simpático y el tono campechano de la alcaldesa (su carisma), como prueban los 235.000 votos de su candidatura en 2007, frente a los 140.000 de la que encabezaba Carmen Alborch.